



Roberta Garza

Para meterse en Honduras

No se puede calificar de otra cosa al golpe de Estado que le dieron a Manuel Zelaya, quien llegó en 2005 a la presidencia por un estrecho margen bajo las siglas de un partido de centroderecha cantando una agenda de seguridad y de combate a la pobreza. Hoy Honduras sigue siendo un país donde las drogas son el motor de la economía, donde los precios de los alimentos aumentan y donde los crímenes violentos están a la orden del día. Quizá por eso en la primavera de 2007 el presidente le ordenó a

La historia de la legalidad como sustento de la barbarie se ha repetido y se repetirá hasta que nos sentemos a discutir y a entender los mecanismos y las fallas de la democracia. Lástima que sea más fácil dar golpe de Estado

los medios electrónicos nacionales llevar dos horas de propaganda diaria favorable a su gobierno. Pero los hondureños terminaron de ponerse nerviosos cuando Zelaya, tras amplios coqueteos con el gorila de Caracas y con Castro —“viniendo de una familia

noble recibió una educación católica y, como Hugo Chávez, encontró la inspiración de su sentido de justicia en las enseñanzas de Cristo”, dijo de él el cubano—, anunció su intención de doblar su mandato vía referéndum.

El domingo, día cuando debía llevarse a cabo la votación, en el primer golpe de Estado militar desde el fin de la guerra fría, Zelaya fue detenido mientras dormía, con el beneplácito de ambas cámaras y de su propio partido, el Liberal. “¡Soy el presidente de Honduras!” gritaba en el aeropuerto, aún en pijamas, en su camino al avión que lo conduciría al exilio en Costa Rica. Ese mismo día el Congreso instalaría a su líder, Roberto Micheletti, en la presidencia hondureña.

Mientras el ejército patrullaba las calles, los noticiarios eran silenciados, la electricidad cortada y un toque de queda general impuesto a partir de las nueve de la noche, el repudio internacional no se hizo esperar: desde Obama hasta Chávez —quien predeciblemente acusó al primero de ser artífice del golpe—, pasando por nuestro Calderón, pidieron el respeto a la democracia, y la OEA montó una reunión de emergencia enfatizando que sus miembros no reconocerían más que la autoridad de Zelaya.

Sin duda todo eso está muy bien: al final se está protegiendo el mandato democrático de un gobernante legítimo. La pregunta aquí es, ¿qué hacer cuando ése o cualquier otro gobernante legítimo amenaza con traerle a su país hambre, pobreza, guerra, odio y muerte? Porque esa historia, la de la legalidad como sustento de la barbarie, se ha repetido y se repetirá una y otra vez hasta que nos sentemos a discutir y a entender los mecanismos y las fallas de la democracia. Lástima que sea mucho más fácil dar un golpe de Estado. ■■

roberta.garza@milenio.com

